

ECONOMÍA INTERNACIONAL

N° 488, 26 de Junio de 2009

AL INSTANTE

VENEZUELA: NUEVAS NACIONALIZACIONES PROFUNDIZAN LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS CÍCLICOS

Dentro del contexto latinoamericano, Venezuela, junto con Ecuador, Argentina y Chile, será uno de los países más afectados por la crisis económica mundial. La alta dependencia que su economía tiene respecto de la evolución del precio del petróleo y las erráticas y poco convencionales políticas económicas del gobierno del Presidente Chávez son los principales factores que permiten explicar la fuerte caída que experimentará el PIB de Venezuela durante el 2009, el que se espera se contraiga un 3,5%.

Este tercer mandato del gobernante venezolano dura hasta el año 2013, pudiendo extenderse aún más considerando la victoria que obtuvo en el referéndum del pasado 15 de febrero. Dado el control total que ejerce el gobierno sobre el parlamento y la captura de

la que han sido objeto el resto de las instituciones estatales del país, es esperable que el actual mandatario mantenga su posición de poder sin grandes problemas. De todos modos, el mal manejo económico del gobierno no pasará inadvertido, y las consecuencias de la recesión que enfrenta el país pueden ser un factor que aumente el ya alto grado de polarización que se vive en el ambiente político venezolano. Mientras que el gobierno buscará hacer frente a los problemas con una radicalización de sus medidas económicas, incluyendo un aumento en las nacionalizaciones, la oposición intentará capitalizar el creciente descontento popular. Esto último generará, sin duda, una reacción de parte del gobierno, lo que representa una seria amenaza para las pocas instituciones democráticas y económicas

venezolanas que van quedando en pie.

A pesar de que hasta hace algunos meses Chávez aún aseguraba que Venezuela permanecería blindada frente a los problemas de extrema debilidad del ciclo internacional, lo cierto es que gracias a las propias e incoherentes políticas gubernamentales, el país verá multiplicados los efectos de un contexto económico externo que ha deteriorado con fuerza la actividad económica venezolana y, en particular, el estado de las finanzas públicas.

Con los recursos financieros del Estado evaporándose, es probable que las expropiaciones que ha llevado adelante el gobierno pasen, de hecho, a convertirse en nacionalizaciones. Los altos precios que alcanzó el petróleo en los últimos años generaron un boom de liquidez que fue el motor de la expansión que experimentó la demanda interna en el país. Con un escenario actual más adverso, la caída de un 2,4% que se espera para este año en la demanda interna complicará aún más el escenario para las inversiones, ya afectadas por un marco regulatorio cambiante e ineficiente y por un gobierno que no ha mostrado interés alguno en establecer reglas del juego claras para los agentes del mercado.

LOS EFECTOS DE LA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO

Si bien los precios del petróleo han mostrado un leve repunte, alcanzando un promedio cercano a los US\$70 el barril durante junio, estos son aún insuficientes para paliar el déficit que están experimentando las arcas fiscales venezolanas. Los ajustes fiscales han sido moderados, y las autoridades han reconocido la necesidad de emitir instrumentos de deuda para buscar financiamiento.

De esta forma, el gobierno ha aprobado un nuevo programa de financiamiento que incluye la emisión de US\$17 billones en bonos soberanos, para los cuales escasea la demanda desde el extranjero. Para incentivar la demanda interna por estos instrumentos, se ha llevado adelante de forma paralela una política monetaria más expansiva, con recortes de las tasas de interés y de los requerimientos de reserva de los bancos.

Lamentablemente, es posible que estas medidas demuestren ser en la práctica sólo una nueva presión inflacionaria para la economía. El gobierno parece estar siguiendo una estrategia de monetización del déficit fiscal, con una creciente masa monetaria orientada a suplir los problemas estructurales que está presentando el fisco venezolano. Este juego ya ha sido visto en otras ocasiones en

el continente, siempre con consecuencias graves para las economías. Al buscar autogenerar una demanda por instrumentos de deuda con un alto riesgo de no pago, las presiones inflacionarias seguirán escalando, profundizando así aún más los efectos de la crisis. El Estado de las finanzas públicas se ha deteriorado a tal punto, que las autoridades han aprobado una nueva normativa que obliga a vender el 70% del oro que produce el país en el mercado doméstico, debiendo ser además ofrecido en primer lugar al Banco Central venezolano. Los altos precios de este metal y la mayor debilidad del dólar pueden hacer que por esta vía el Banco Central de Venezuela genere ganancias que puedan ser posteriormente traspasables al fisco.

A diferencia de otros años, el gobierno venezolano no dispone de los grandes excedentes de la industria petrolera que le han permitido financiar gran parte del gasto público. A esto se suma el hecho de que las pérdidas que se esperan en las empresas estatales, como ocurrirá con Petróleos de Venezuela (PDVSA), harán que los requerimientos por financiamiento se amplíen más allá del gobierno central.

A la situación económica del país tampoco ayuda la errática política monetaria que ha llevado adelante el Banco Central de Venezuela, controlado directamente por el ejecutivo, como tampoco

ayuda la creciente carga burocrática del Estado ni el precario estado en que se encuentran los derechos de propiedad. Los desequilibrios que está presentando el estado venezolano se han traspasado también a importantes empresas públicas, afectando con esto a la estructura productiva del país en su conjunto. Esto está afectando la competitividad de las empresas estatales, las que bajo el gobierno de Chávez han adquirido un peso cada vez mayor en la economía nacional.

Es sabido que durante décadas, la expansión de la economía venezolana ha mostrado estar fuertemente ligada a la evolución de los precios del petróleo y sus derivados. Bajo el gobierno del actual mandatario, esta relación de dependencia ha aumentado aún más, conforme han disminuido los incentivos para el desarrollo del sector industrial no relacionado con el petróleo. Esta será la principal vía a través de la cual la crisis económica se irá manifestando a lo largo del año en Venezuela. Dado un escenario de menor liquidez, el gobierno se verá obligado a recortar el gasto público siendo de esta forma el único gobierno latinoamericano que se verá presionado a actuar de esta manera. También es esperable que, tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, el gobierno utilice el control que ejerce sobre el tipo de cambio para devaluar el Bolívar y

compensar así los menores ingresos que está teniendo el país por sus exportaciones.

Otra diferencia de Venezuela respecto a sus pares latinoamericanos, es que éste será uno de los pocos países que, junto con una fuerte contracción de la economía, deberá enfrentar simultáneamente un escenario de creciente inflación, la que podría llegar a niveles superiores al 30% a finales del 2009. Esto contribuirá aun más al declive del poder de compra de los consumidores venezolanos, afectando también el nivel de inversión en el país.

NACIONALIZACIONES Y CRECIENTE INFLUENCIA ESTATAL EN LA ECONOMÍA

El énfasis que ha puesto el gobierno del Presidente Chávez en la nacionalización de empresas ha adquirido nuevos ímpetus a partir de mayo pasado. A principios de este mes, el parlamento venezolano, controlado por el ejecutivo, aprobó una ley que permite la expansión del control estatal en la industria relacionada con el petróleo. Además, al modificar las anteriores condiciones existentes para las nacionalizaciones, la nueva ley autoriza al gobierno a pagar sólo el valor libro de las acciones de las empresas, pudiendo además, realizar los pagos mediante bonos del gobierno en lugar de transferencias de dinero.

El plan del gobierno es obtener el control mayoritario de la industria petrolera de Venezuela, buscando, de esta manera, conseguir nuevos recursos tras el ahogo financiero al que fue sometida PDVSA, por la utilización de sus ingresos en el financiamiento del gasto público. Por ahora, las intenciones del gobierno están centradas en adquirir unas 60 empresas extranjeras relacionadas directa o indirectamente con la producción de crudo.

La captura que está realizando el Estado venezolano del aparato productivo privado del país, traerá consecuencias graves para el funcionamiento de la economía. Las acciones del gobierno ya han mermado la capacidad productiva de esta industria, lo que se verá incrementado por la utilización política que se busca hacer de las nuevas empresas que el Estado está nacionalizando. Además de disuadir aún más a las inversiones extranjeras, el actual escenario implicará una caída pronunciada en la producción, afectando con esto los ingresos por exportaciones. Los problemas productivos y las ineficiencias administrativas harán, también, más lenta la recuperación de la economía cuando los precios del crudo vuelvan a sus niveles anteriores. La estructura de la industria ha sido afectada de tal forma, que no podrá suplir posibles aumentos en la demanda cuando la

situación económica del mundo se estabilice.

Por lo pronto, el gobierno ha insistido en que Venezuela mantiene un nivel de producción de petróleo de 3 millones de barriles diarios, lo que es desmentido por fuentes independientes que estiman que la producción no sobrepasa, en ningún caso, los 2,2 millones de barriles por día. Mientras el gobierno espera atraer capitales para aumentar el área de explotación actual, las últimas adjudicaciones para la explotación de reservas han debido ser pospuestas por falta de oferentes. Algunos análisis señalan que Petróleos de Venezuela está condicionando los proyectos conjuntos con inversores extranjeros a que estos últimos renuncien a sus derechos de arbitraje sobre los contratos que se firmen. Considerando el escaso respeto que ha mostrado el gobierno por los derechos de propiedad, la participación de empresas extranjeras en este contexto se transforma más bien en un acto extremo, próximo al suicidio.

De todos modos, esta no es la primera vez que el gobierno de Venezuela utiliza programas de nacionalización en la industria petrolera, para obtener fondos. Ya el 2007 el Estado había adquirido la propiedad de cuatro importantes proyectos conjuntos con empresas extranjeras en el estratégico cinturón del Orinoco, forzando a los

inversionistas privados a mantener una participación marginal en dichas empresas. En esa oportunidad, ExxonMobil y ConocoPhillips, dos empresas norteamericanas, prefirieron dejar completamente los proyectos conjuntos en lugar de mantenerse en una posición tan débil en ellos. Junto con un mayor peso del estado en la industria, se han aumentado además los royalties a las empresas extranjeras, lo que en definitiva ha terminado por asfixiar financieramente al sector privado. Hay que considerar también que las nacionalizaciones del gobierno no se han limitado a la industria petrolera. Ha habido acciones similares en el sector eléctrico, las telecomunicaciones, cementos, la agricultura, la distribución de alimentos y bancos. En el sector agrícola, por ejemplo, el ejecutivo anunció en mayo la expropiación de 8 fundos adicionales. Es sabido además que el gobierno de Chávez está realizando gestiones para tomar el control del Banco de Venezuela, la filial local del Grupo Santander.

El gobierno venezolano parece estar apostando a que, a pesar del complejo marco que provee el país para las inversiones extranjeras, éstas puedan ser atraídas por las enormes reservas de la región del Orinoco y por el alto potencial que existe para futuras exploraciones petroleras. El problema es que la inseguridad del marco jurídico y regulatorio, los altos

costos de producción y los ineficientes esquemas tributarios hacen que para los capitales extranjeros sea particularmente riesgoso aventurarse con proyectos de inversión en el país.

El deterioro en el clima de negocios que enfrentan las empresas extranjeras en Venezuela no ha pasado inadvertido en Chile. Se estima que unos US\$80 millones correspondientes a pagos que debieran recibir empresas chilenas se encuentran retenidos por la Comisión de Administración de Divisas del Estado venezolano, entidad que administra el flujo de divisas en Venezuela. De estos fondos, cerca de la mitad se relacionan con las actividades que desarrolla LAN en el país. Además, el gobierno venezolano decretó la paralización de faenas en la empresa Vencerámica, perteneciente al holding chileno Cisa. A esto último se suman una serie de procesos legales iniciados por empresas chilenas que se han visto afectadas por la intromisión del Estado en contratos de prestación de servicios en distintas áreas de la economía de Venezuela.

PROYECCIONES Y CONCLUSIONES

Es poco probable que mientras el Presidente Chávez se mantenga en el poder, los profundos problemas de la economía venezolana, como la dependencia

del petróleo y la costosa e ineficiente burocracia estatal, puedan ser solucionados. Con un entorno político y económico incapaz de generar incentivos para la inversión privada, un desarrollo sustentable del sector no energético de la economía es difícil de visualizar. El accionar del gobierno venezolano no se ha dirigido solamente contra el sector privado de la economía, sino que se ha dirigido también a mermar las capacidades de organización de la ya fragmentada oposición política.

Tras las elecciones municipales del 2008, el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, emergió como una de las figuras opositoras más destacadas del escenario político nacional. A mediados de abril, y tras anunciar continuos hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno, Rosales debió dejar el país y solicitar asilo político en Perú, desatando nuevas tensiones entre el gobierno de Chávez y este último país. Otro importante político de oposición, el alcalde de Caracas Antonio Ledezma, ha visto cómo el parlamento ha disminuido sus poderes para administrar recursos, debiendo ahora destinar parte importante de los ingresos municipales al gobierno central.

A pesar del creciente poder político que ha adquirido el Presidente Chávez durante sus sucesivos mandatos, los

desequilibrios estructurales de la economía venezolana pueden ser un factor, que finalmente impulse a la reorganización de la oposición. De todos modos, durante el 2009 el gobierno hará uso de todas las herramientas a su haber para intervenir la economía y hacerse así

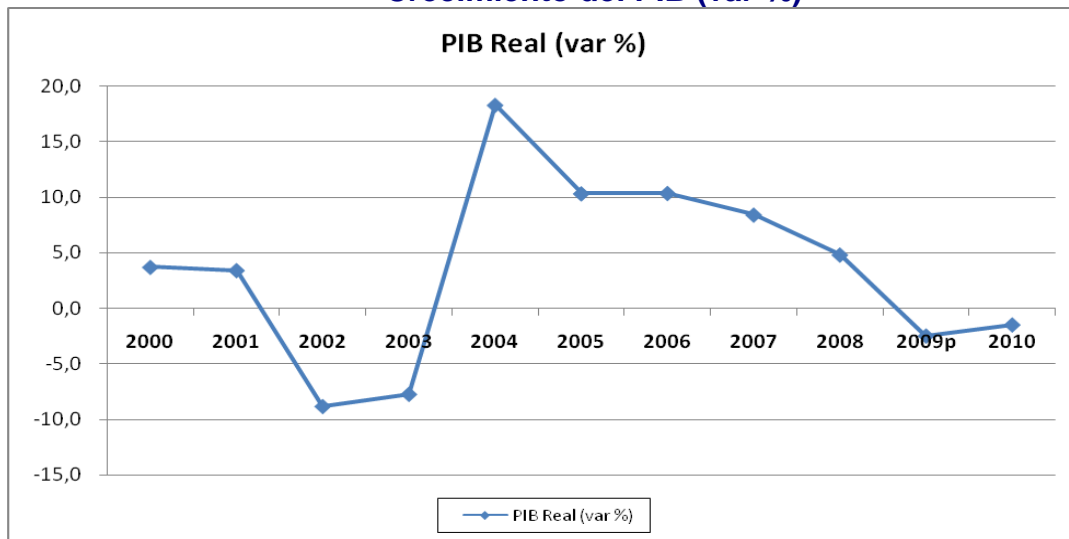
con nuevos recursos, profundizando los daños que ya ha provocado a la estructura económica del país y a sus relaciones con los principales países de Latinoamérica y del resto del mundo.

Cuadro N°1
Índices económicos de Venezuela

	2004	2005	2006	2007	2008	2009p	2010p
PIB Real (var %)	18,3	10,3	10,3	8,4	4,8	-2,5	-1,5
Demanda Interna (var %)	28,2	18,7	20,1	19,3	5,5	-2,4	2,7
Consumo Privado (var %)	15,2	14,6	15,6	16,1	6,8	-2,5	3,5
Inversión (var %)	49,7	38,4	26,6	25,4	-2,4	-2,0	1,5
Balanza comercial (US\$ Mill.)	21430	31708	32712	23702	52322	15820	34680
Exportaciones (US\$ Mill.)	38748	55716	65210	69165	99923	55220	76000
Importaciones (US\$ Mill.)	17318	24008	32498	45463	47601	39400	41320
Cuenta Corriente (% del PIB)	13,8	17,7	14,7	8,8	14,7	0,4	3,2
Inflación (%dic/dic)	21,7	16,0	13,7	18,7	31,4	30,0	40,0
Balance Fiscal (% del PIB)	2,5	4,1	-1,5	-2,6	-1,1	-5,3	-3,7

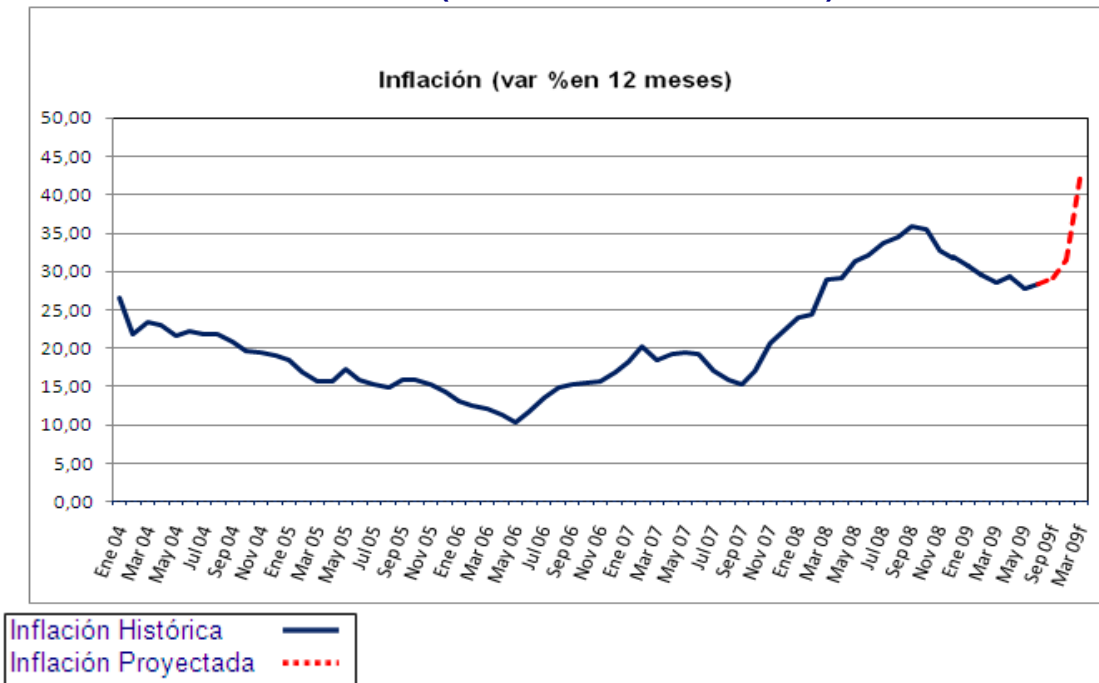
Fuentes: JP Morgan, IIF y The Economist.

Gráfico N°1
Crecimiento del PIB (var %)



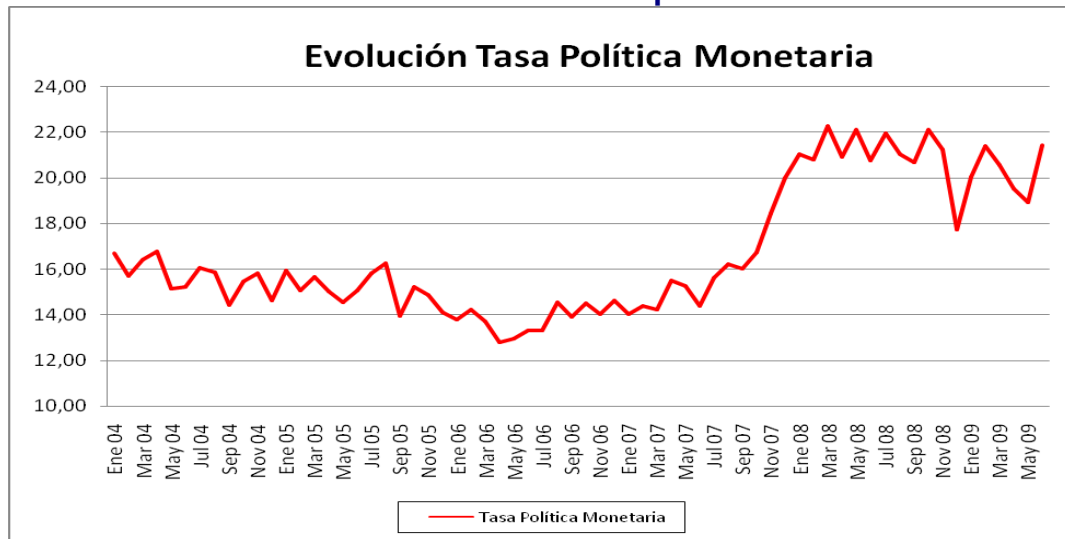
Fuente: IIF, JP Morgan, The Economist.

Gráfico N° 2
Inflación (variación % en 12 meses)



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela y JP Morgan.

Gráfico N°3
Evolución tasa de referencia de política monetaria



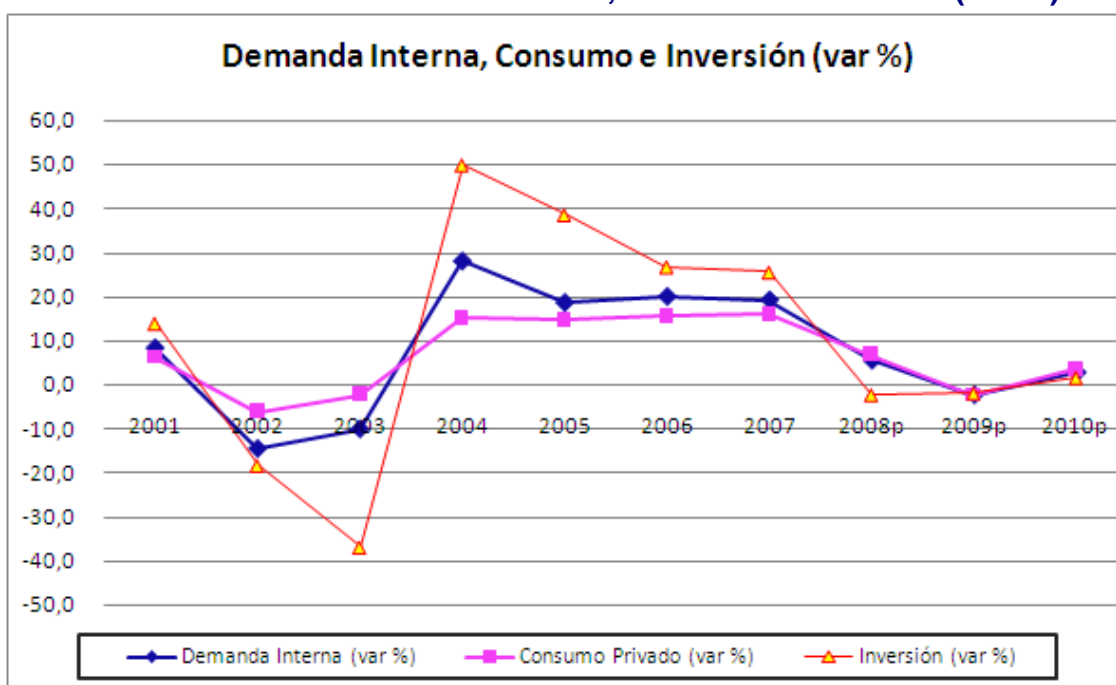
Fuente: Banco Central de Venezuela.

Cuadro N° 2
Clasificaciones de riesgo

	Moody's	S&P
Venezuela	B2	BB-

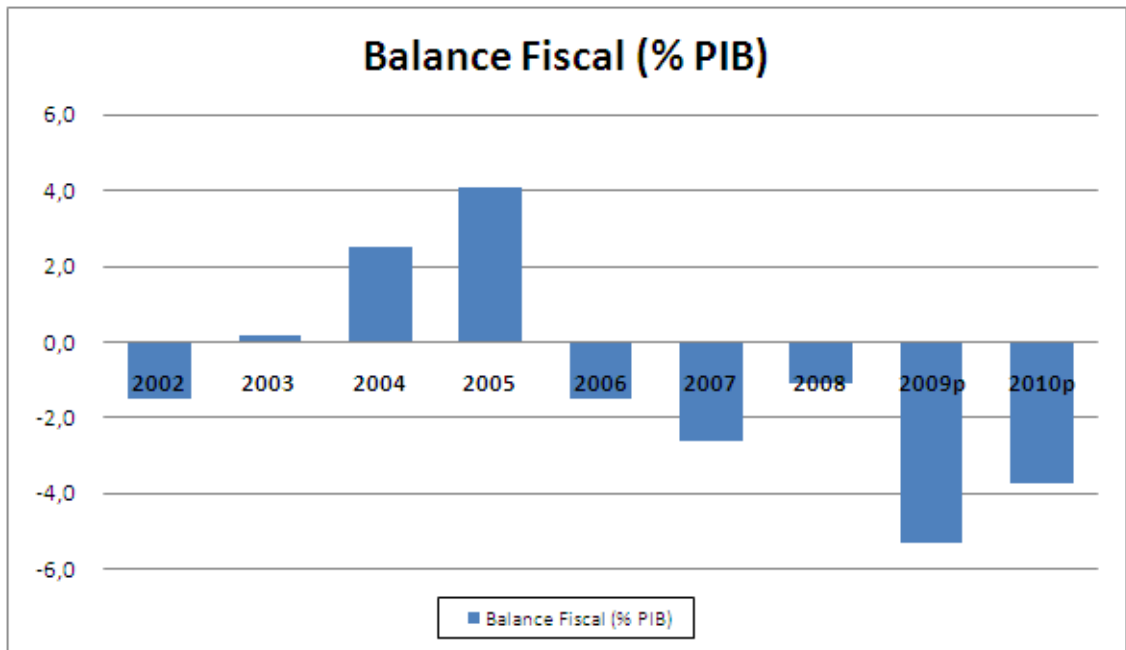
Fuente: JP Morgan

Gráfico N° 4
Crecimiento de la demanda interna, consumo e inversión (var %)



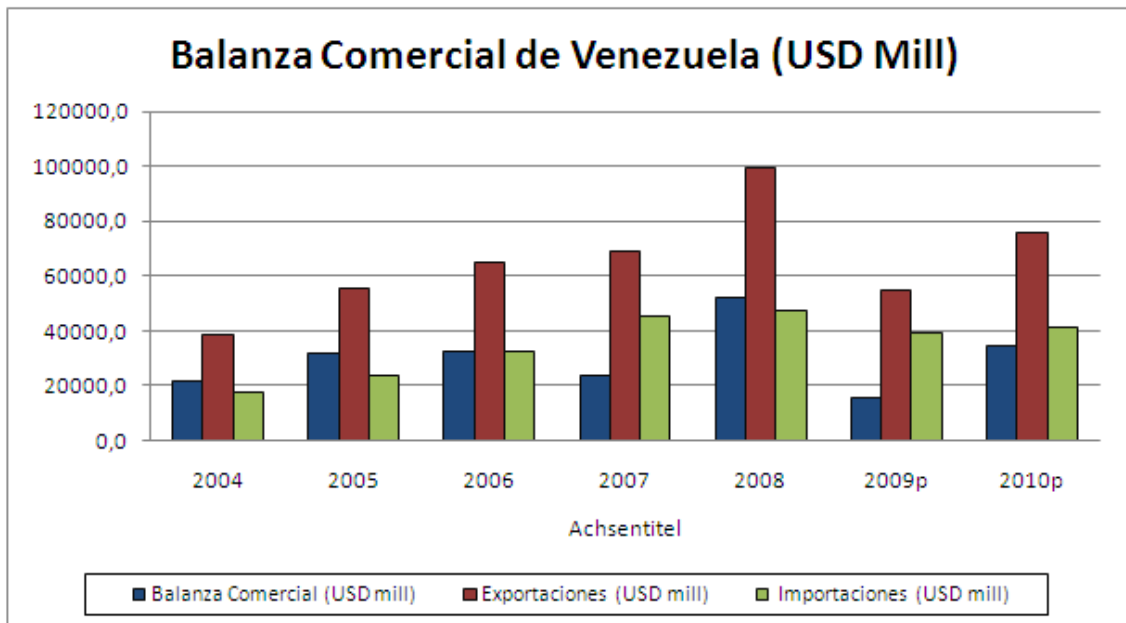
Fuente: JP Morgan, IIF y The Economist.

Gráfico N° 5
Balance Fiscal (% del PIB)



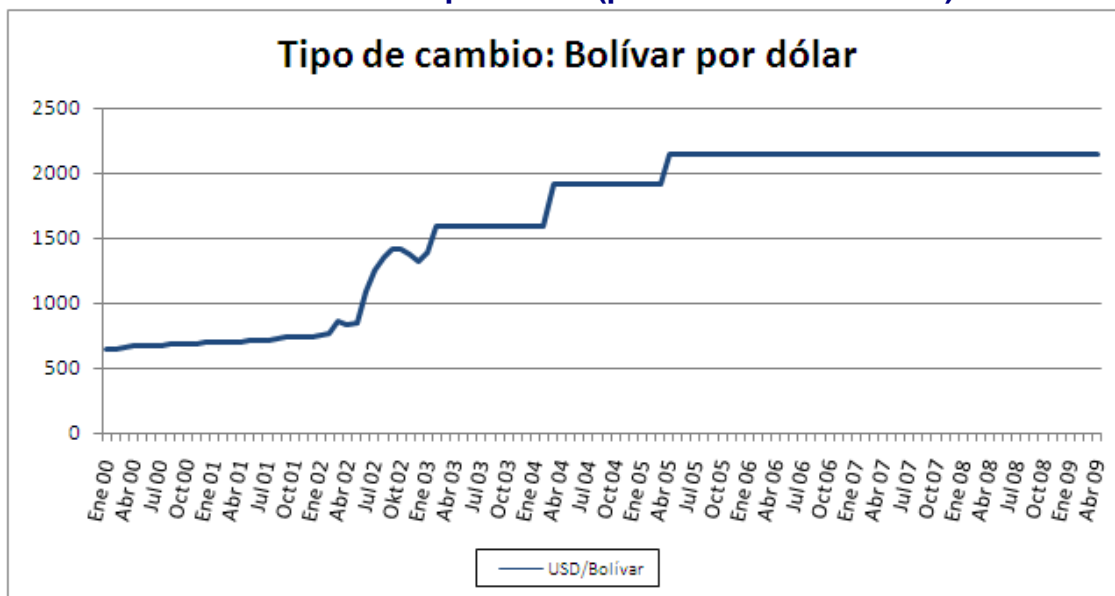
Fuente: IIF y JP Morgan

Gráfico N° 6
Balanza Comercial



Fuente: IIF y JP Morgan

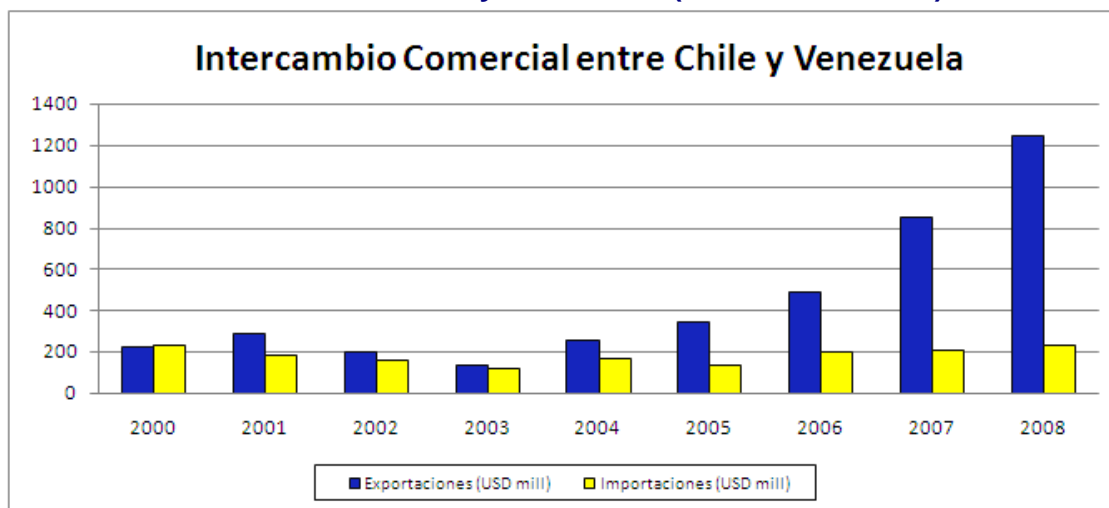
Gráfico N° 7
Tipo de cambio
Paridad Bolívar por Dólar (promedios mensuales)



Fuente: Banco Central de Chile

Nota: Los datos están ajustados al precio del Bolívar. Desde el año 2008 rige en Venezuela el Bolívar Fuerte, que tiene un valor correspondiente a 1000 Bolívares.

Gráfico N° 8
Comercio de Chile y Venezuela (millones de USD)



Fuente: Banco Central de Chile y Servicio Nacional de Aduanas